

Sandra Morelli Rico

Contralora General de la República

Y el control fiscal encima de las mineras

Los datos de Sandra Morelli, Contralora General de la República, son públicos: nacida en 1965, abogada de la Universidad Externado de Colombia de la promoción de 1987, luego de una excelente carrera como estudiante: merecedora durante cinco años de la beca de honor que reconoce ese centro académico. Ella se fue a la Universidad de Bologna a especializarse en el área de Derecho Administrativo y Ciencias de la Administración.

Durante sus estudios de posgrado en la Universidad más antigua del mundo, obtuvo, de la Unión Europea, dos Becas para cursar tanto en la Sorbona de París, como en Montpellier, estudios en las áreas de derecho administrativo, ciencias de la administración y servicios públicos, dice su perfil en Google. El gobierno italiano también premió su desempeño con una beca de estudio.

Desde su primer día en la Contraloría sorprendió. Cuando fue elegida por el Congreso de la República dijo: “No me tembrará la mano como Contralora”. Solo quienes la conocían le creyeron, pues la mayoría esperaban que se desempeñara siguiendo la ruta de sus antecesores, sin mayores emociones.

Estaban equivocados quienes esperaban poca acción y así ha sido desde que arrancó: denunció a su antecesor por despilfarro, lo cual le impidió al excontralor Turbay Quintero seguir en la política al menos por un tiempo, abrió pleitos contra funcionarios de varios ministerios, se enfrentó con el poderoso Ministro de Hacienda, dispuso el embargo de las cuentas del entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y del exalcalde Luis Eduardo Garzón, y ha suspendido a varios gobernadores. Denunció las pen-

siones escandalosas, se ha enfrentado con los grandes concesionarios de obras públicas y no tiene “pelos en la lengua” para denunciar sobre costos en las obras públicas.

Exigente consigo misma y con el trabajo de los demás, herencia de su madre, abuelo y bisabuelo, también abogados. Y sin temor alguno, porque siempre tiene el respaldo de las normas.

Como ninguno de sus antecesores lo hizo, ella decidió que el medio ambiente es un patrimonio público y en esos términos si no se cuida se puede dar un detrimento patrimonial del Estado. Ya abrió investigaciones a funcionarios públicos que dieron autorización para construir obras eléctricas.

En las negociaciones entre gobierno y empresas para la firma de contratos de explotación, ella está ahí: ha sido una “piedra en el zapato” en las negociación de los términos del proyecto Cerro Matoso y en los contratos de Ecopetrol con firmas privadas.

Acaba de marcar su territorio con el aval a una investigación adelantada por un grupo de economistas sobre la minería en el país. Y ese estudio parece haberlo hecho suyo. Un gran poder que no se puede menospreciar.

